

La 'misión suicida' de una fuerza militar de gran escala que planea sobre el Caribe

Nuria López

El Estado ha perdido el monopolio de la violencia y las pandillas dominan el espacio público, pero el turbio precedente de estas operaciones levanta suspicacias.

La llegada de los primeros efectivos keniatas de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, liderada por el país africano para intentar poner freno a la violencia desatada por las pandillas, está por cumplir el año. Sin embargo, las cifras récord de **asesinatos, heridos y secuestros no paran**. El desembarco fue solicitado por las autoridades haitianas, desbordadas por las **sucesivas crisis humanitarias** que ha atravesado el país caribeño, y finalmente recibió el aval de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a finales de 2023.

No obstante, con el transcurso de los meses se especula sobre el impacto real que cosechará finalmente la iniciativa, teniendo en cuenta las experiencias pasadas nada halagüeñas de intervenciones extranjeras en Haití.

El papel de Kenia

En 2023, Kenia se ofreció a liderar la fuerza multinacional para enfrentar la ola de violencia en Haití. Desde el desembarco de los primeros efectivos en junio del año pasado, **del total de los 2.500 prometidos no ha llegado ni la mitad**. Se esperaba que las tropas keniatas desplegaran en el terreno su experiencia en gestión de disturbios y operaciones de mantenimiento de la paz.

Además, contaban con otros países que se sumaron a esta fuerza, como Benín, Bangladesh e incluso Chad, además del apoyo logístico y financiero de EE.UU., que se comprometió a entregar más de 300 millones de dólares para la misión y 60 millones adicionales para asistencia logística.

El objetivo principal de la MSS en Haití era reponer la seguridad ciudadana en el país y permitir la **celebración de elecciones** libres y democráticas, que están previstas para el 15 de noviembre de este año. Los resultados, hasta ahora, han sido exigüos. Del mismo modo, la iniciativa ha levantado grandes **reticencias de la oposición política en Kenia**, que la contempla como una 'operación suicida', por lo que han presentado varios recursos ante la justicia para ponerle un freno.

En paralelo, organizaciones defensoras de los derechos humanos han mostrado su preocupación debido al **historial de brutalidad policial en Kenia**, donde la violencia de las fuerzas del orden causó la muerte a 60 personas en 2024 por el uso excesivo de la fuerza, al reprimir protestas contra iniciativas gubernamentales.

El recelo de estas organizaciones es que se esté exportando a Haití una cultura de represión policial, que **puede caldear aún más la grave crisis** que atraviesa la nación desde la espiral de violencia agravada tras el magnicidio de Jovenel Moïse, en julio de 2021.

Malas experiencias

La Policía keniana, que llegó al país caribeño el 25 de junio de 2024, ha tenido que enfrentarse a la **desconfianza** que despierta en un país atravesado por media docena de operaciones similares de la ONU, desde principios de los años 90. La mayoría de ellas han estado bañadas en diversos tipos de escándalos, relacionados principalmente con el **uso desmesurado de la violencia**, la propagación de enfermedades y los abusos sexuales sistemáticos.

La más larga de esas operaciones fue la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), que se prolongó desde 2004 hasta 2017. Pero la experiencia se había iniciado una década antes: desde 1993 hasta 2000 hubo al menos cinco despliegues de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. La MINUSTAH fue una de las más polémicas. Se reportaron **abusos sexuales a niñas, adolescentes y mujeres** por parte de miembros de los cascos azules; niños engendrados y abandonados por personal de la misión; así como explotación sexual, violaciones y ejecuciones extrajudiciales.

Caos en Haití

Sacudido por la violencia, Haití se hunde cada vez más en el caos. Miles de personas han tenido que salir de la capital, Puerto Príncipe, hacia las provincias, convirtiéndose en refugiados en su propio país.

El Estado hace tiempo que ha perdido el monopolio de la violencia y **las pandillas dominan el espacio público**, sobre todo en la capital y su área metropolitana, donde tienen el control de más del 80 % del territorio. Según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025, al menos 1.617 personas murieron y 580 resultaron heridas en actos de violencia protagonizados por bandas. También se reportaron 161 secuestros extorsivos.

El informe de la Binuh recoge que al menos 802 personas murieron durante operativos de las fuerzas de seguridad, se registraron 65 casos de ejecuciones sumarias, presuntamente a manos de elementos de la Policía, y se identificaron 333

supervivientes de violencia sexual. Del 1 de octubre de 2024 al 31 de marzo de 2025, se han producido **una media de 18 muertes violentas al día**.

Un país con múltiples problemas

El país atraviesa desde hace años una crisis multidimensional. A la violencia brutal que se ha extendido, principalmente en la capital, se une una **corrupción política generalizada**. De hecho, si finalmente tienen lugar, las de noviembre serán las primeras elecciones en Haití en casi una década.

Además, se trata de un país con **muy pocos efectivos policiales** para hacer frente al crimen organizado y las bandas. Tiene casi 12 millones de habitantes, pero cuenta con poco más de 13.000 agentes de Policía, a pesar de los esfuerzos de reclutamiento realizados por las autoridades.

Se estima que podría haber más de **medio millones de armas de guerra en manos de las pandillas**, un flujo de armamento y munición que proviene principalmente del estado estadounidense de Florida, según refleja Human Rights Watch. Los ataques de los grupos criminales, ahora unidos en la coalición 'Viv Ansanm' (Viviendo Juntos), afectan gravemente la prestación de servicios públicos, como electricidad, agua, saneamiento, atención médica, educación y transporte, entre otros. Por esta razón, Haití se ha convertido en uno de los países con una de las tasas más altas de inseguridad alimentaria aguda del mundo, con **uno de cada dos habitantes padeciendo hambre aguda**.

La inestabilidad política, que tuvo su mayor impulso con el **asesinato de Moïse**, ha continuado hasta la actualidad. Varios miembros del consejo presidencial de transición están acusados de corrupción y el primer ministro surgido de ese proceso, Garry Conille, fue destituido abruptamente junto a su Gobierno. En la actualidad, el país está bajo el mando del premier: Alix Didier Fils-Aimé.

Haití no ha tenido funcionarios electos a nivel nacional desde enero de 2023 y su parlamento está inactivo desde 2019.

Escasos resultados

En septiembre, el experto en derechos humanos de la ONU, William O'Neill, decía que la MSS había recibido un equipo inadecuado y sus recursos eran insuficientes. En octubre, la representante especial del secretario general ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Haití, María Isabel Salvador, afirmó que la situación había **"empeorado lamentablemente"** y que el despliegue de la MSS estaba "mucho de ser suficiente".

Los posteriores reportes de la Naciones Unidas no han sido más optimistas, ya que dan fe de la alarmante situación de los derechos humanos en el país y de "medidas

mínimas" tomadas por las autoridades para exigir responsabilidades a los autores de las violaciones.

La llegada de la MSS no parece haber supuesto una diferencia para el país, teniendo en cuenta que este año se ha intensificado la actividad de las bandas para extender su influencia. Además, el contingente prometido **no termina de aterrizar**. La misión cuenta hasta la fecha con 761 agentes del Servicio de Policía Nacional keniana (del total de 1.000 previstos), seis efectivos de la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas, dos de Belice, 24 de Jamaica, 150 de Guatemala y 78 militares de El Salvador. En total, se trata de poco más de 1.000 uniformados, que van llegando a cuentagotas y no cubren la cuota de 2.500 que se comprometió al principio.

En medio de la incertidumbre, la propuesta de un amplio despliegue militar sigue latente. De hecho, Benín se comprometió a aportar otros **2.000 soldados**, lo que convertiría al país africano en la mayor fuerza individual de la misión (y la única de habla francesa, idioma oficial en Haití). Pese a ello, ninguno de esos uniformados ha aterrizado en la empobrecida nación caribeña.